



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FORMA B-1

AMPARO EN REVISIÓN 9/2022-I.

MATERIA: PENAL.

QUEJOSO Y RECURRENTE:

MAGISTRADO PONENTE:

JUAN MANUEL GARCÍA ARREGUÍN.

SECRETARIA:

HARUMI YVONNE TAKASHIMA MEZA.

Mexicali, Baja California, acuerdo del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria celebrada el dos de diciembre de dos mil veintidós.

VISTOS para resolver los autos del recurso de revisión penal **9/2022-I**, relativo al juicio de amparo indirecto 18/2021, del índice del Segundo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad; y,

R E S U L T A N D O:

1. PRIMERO. Por escrito presentado el dieciocho de octubre de dos mil veintiuno ante la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Unitarios en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad,



LIBRE INYUVONNE TAN ANJUNA MEZA
CALLE DE LA PAZ 1000, COL. CENTRO, MEXICALI, BAJA CALIFORNIA
TEL: 01 (61) 123 45 67

por conducto de su defensor particular licenciado solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal, en contra del acto reclamado de la autoridad siguiente:

"III. AUTORIDAD RESPONSABLE

- Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito, en residencia en esta ciudad; y con domicilio conocido en esta ciudad

IV. LA LEY O ACTO QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA:

- La resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno (23-septiembre-2021), dictada en el Toca Penal 42/2021, del índice de la responsable, mediante la cual **confirmó** la diversa resolución de siete de agosto del año en curso, emitida por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, en la que dictó auto de vinculación a proceso en la causa penal 307/2021, en contra del imputado

por el hecho que la ley señala como delito **contra la biodiversidad, en la modalidad de poseer ejemplares de una especie acuática sujeta a protección especial**, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción IV del Código Penal Federal, y el diverso ilícito de **delincuencia organizada, en su modalidad de cometer delitos contra el medio ambiente**, previsto en la fracción X, del artículo 2, y sancionado en el inciso b), de la fracción II, del numeral 4, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, cometidos en términos de los artículo 13, fracción II, 7, 8, 9, párrafo primer, todos del Código Penal Federal".

2. SEGUNDO. En auto de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno, el Segundo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, registró la



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 9/2022-I PENAL

FORMA B-1

demanda de amparo con el número 18/2021; tuvo por recibido el informe con justificación remitido por la Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, al que anexó copia del toca penal 42/2021; la certificación correspondiente; y, el oficio enviado por el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California al que adjuntó copia de la carpeta de registros judiciales 307/2021. Finalmente concedió el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Federación Titular de la Célula V-6 UEITMPO Ciudad de México, licenciado

3. TERCERO. Seguido el juicio en sus etapas procesales, el diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, el Secretario en funciones de Magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, con sede en esta ciudad, celebró la audiencia constitucional y dictó sentencia terminada de engrosar el nueve de diciembre siguiente, cuyos puntos resolutivos son del tenor siguiente:

“PRIMERO. La Justicia de la Unión **NO AMPARA NI PROTEGE** a [redacted] contra el acto

reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el **último** considerando de esta sentencia.

SEGUNDO. Publíquese esta ejecutoria con supresión de los datos personales y confidenciales de las partes, en virtud de no existir en autos autorización expresa de su parte con tal publicación, ello de acuerdo con lo que establecen los artículos 1, 9, 16, 98 fracción III, 110, 113, 117 al 120 de la ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a los diversos numerales 6 y 7, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.”

4. CUARTO. Inconforme con la anterior determinación, mediante escrito presentado el veintitrés de diciembre de dos mil veintiuno, - - -, por conducto de su defensor particular licenciado - - - interpuso recurso de revisión.

5. QUINTO. Por acuerdo de Presidencia de veinticinco de enero de dos mil veintidós, este Primer Tribunal Colegiado, al que por razón de turno correspondió conocer el presente asunto, admitió el recurso de revisión, el cual se registró con el número **9/2022-I**.

6. SEXTO. El **dos de marzo de dos mil veintidós**, con fundamento en el artículo 92 de la Ley de Amparo, se ordenó el turno del presente asunto a la ponencia del

EL TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA DE AMPARO DEL PRIMER CIRCUITO, CONSTITUIDO POR LOS JUECES DE HONORARIO Y PERMANENTE TERCERA SECCIÓN

HARUMI YVONNE TAKASHIMA MEZA
70.6a.06 20 63.6a.60 00 00 00 00.00.00.00.10 00.100.02.54.56
02.08.23 14.54.57

HARUMI YVONNE TAKASHIMA MEZA
71.6a.06 24 63.6a.66 00 00 00 00.00.00.10 00.100.02.54.56
02.08.23 14.54.57

HARUMI YVONNE TAKASHIMA MEZA
71.6a.06 24 63.6a.66 00 00 00 00.00.00.10 00.100.02.54.56
02.08.23 14.54.57



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 9/2022-I PENAL

FORMA B-1

veinticinco, veintiséis de diciembre de dos mil veintiuno, por haber sido sábados y domingos.

11. Lo que se corrobora con el siguiente cuadro calendario

DICIEMBRE					
Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	
		1	2	3	
6	7	8	9	10	
13	14	15	16	17	
20	21	22	23	24	
27	28	29	30	31	

- Fecha en que se notificó la sentencia recurrida. (f. 723)
- △ Surtió efectos la notificación.
- Días inhábiles.
- Días del plazo.
- Presentación del recurso de revisión. (f. 6)

12. TERCERO. La sentencia recurrida establece lo siguiente:

13. “PRIMERO.- Este Segundo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, es competente para conocer del presente juicio de amparo, con fundamento en lo establecido en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, con apoyó además en lo establecido en los preceptos 1, fracción I, 6, 33, 35, 36, 107, fracción IV, 108, todos de la Ley de Amparo en vigor; 28 y 29, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como por lo dispuesto en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal y los diversos que lo han reformado, modificado y adicionado a la fecha de

ILICIA YVONNE TANQUELA MEZA
2019-06-23 14:54:57
02 19 21 14 54 57

la presente resolución, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos Judiciales en que se divide la República Mexicana, en virtud de que el Tribunal Unitario de donde proviene el asunto reside dentro de la jurisdicción que corresponde a este Órgano Jurisdiccional.

14. SEGUNDO. La autoridad responsable **Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito**, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado **aceptó** la existencia del acto reclamado; en tal virtud, deberá tenerse por existente el mismo, al tenor de lo señalado en la jurisprudencia número 278, consultable a foja 231 del Tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, con número de registro digital 917812; cuyo rubro y texto literalmente es el siguiente:

15. "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO.- Si en el confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto."

16. Lo anterior, se corrobora con la constancia que acompaña la responsable para justificar la constitucionalidad del acto que se le reclama, misma que, dada su naturaleza de documental pública se le otorga valor probatorio pleno, en términos de lo previsto en los artículos **129 y 202** del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo por disposición expresa del numeral **2o** del propio ordenamiento.

17. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación funcionando en Pleno, publicada a página 153, tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, con número de registro digital 394182, que a la letra indica:

18. "DOCUMENTOS PUBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena"

19. TERCERO. De conformidad con los preceptos 74, fracción I, y 76 de la Ley de Amparo, se precisa el acto reclamado que se impugna como inconstitucional, a efecto



- La sentencia de **veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno**, dictada en el toca penal 42/2021, del índice del **Primer Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito con residencia en esta ciudad**, en la que se **confirmó el auto de vinculación a proceso** dictado contó el aquí quejoso, por el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California con sede en esta ciudad, en funciones de Juez de Control, en la causa penal 307/2021 de su índice, en la continuación de la audiencia inicial dé seis de agosto del año en curso.

20. CUARTO. Previo al estudio de los conceptos de violación, deben analizarse las causales de improcedencia que pudiesen surgir en el presente juicio, lo aleguen o no las partes; esto, habida cuenta que, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, las causas de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo deben ser examinadas de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo.

21. Una vez efectuado el análisis de las constancias obrantes en autos, este tribunal constitucional advierte que no se actualiza alguna de las mismas, además, ninguna de las partes invocó su existencia, por lo que no procede realizar mayor pronunciamiento al respecto.

22. Sin que resulte necesario transcribir los conceptos de violación de la parte quejosa, por obrar en el escrito de demanda de amparo y en razón de que no existe disposición legal que obligue a ello.

23. Respalda lo anterior, por las razones que la informan, la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, visible a página 830; registrada con el número 1003219, de rubro y texto siguientes:

24. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCION. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas



28. Resolución que constituye el acto reclamado en este juicio de garantías.

1. Aspectos generales del auto de vinculación a proceso; 2. análisis de oficio de los requisitos constitucionales y legales del acto reclamado; y 3. estudio de los conceptos de violación.

1. Aspectos generales del auto de vinculación a proceso.

30. El artículo 19 constitucional, dispone que para el dictado del auto de vinculación a proceso se requiere la existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión, es decir, ya no se exige la comprobación del cuerpo del delito ni la justificación de la probable responsabilidad.

31. En ese sentido, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 87/2016, determinó que el sistema penal ya no prevé un "acreditamiento" del cuerpo del delito, sino el "establecimiento" de que los hechos motivo de la imputación encuadran en un delito.

11



38. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito.

HARTUNG YOUNG, TASHIMA, ME/CA
70 62 66 20 63 62 66 66 06 00 00 00 09 04 00 00 02 54 56
02 08 23 14 54 57

2. Análisis de oficio de los requisitos constitucionales y legales del acto reclamado.

43. Antes de adentrarnos al estudio de los conceptos de violación, resulta procedente estudiar de oficio, si como lo determinó el Tribunal Unitario responsable, el auto de vinculación a proceso, reúne los requisitos que establece el artículo 19 constitucional, así como el diverso 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Numerales que en su parte conducente refieren lo siguiente:

44. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

45. "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de



55. En esa medida, este Tribunal de amparo considera que como de forma correcta lo determinó la autoridad responsable, el Juez de Control observó los requisitos legales para dictar el auto de vinculación a proceso, toda vez que las constancias audiovisuales que allegó el Administrador del Centro de Justicia Penal Federal



64. •Dictamen en la especialidad de criminalística forense de fecha treinta de julio de dos mil veintiuno con

número de folio 45202, signado por _____, perito adscrita a la Coordinación General de Servicios Periciales.

HARIMYONGSE TAE, ASHINA MEZA
70.69 66.20 63.62 66.00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 54 5
02 08 25 14 54 57



79. "Artículo 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

80. [...]

81. II. Toda audiencia se desarrollará en presencia juez, sin que pueda delegar en ninguna persona el cargo y la valoración de las pruebas, la cual deberá hacerse de manera libre y lógica;

82. [...]

83. X. Los principios previstos en este artículo, se observarán también en las audiencias preliminares al juicio".

84. De esta manera, la autoridad responsable estimó que el Juez de Distrito adecuadamente estableció que existen datos que evidencian la comisión hechos y que la ley señala como delitos a esos hechos; además, determinó la probabilidad de que el aquí quejoso los cometió o participó en su comisión. Con dichos razonamientos el Juez de origen cumplió con las consideraciones que dieron lugar a la tesis enunciada con anterioridad, con rubro: **AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)**

85. En efecto, el hecho ilícito por el cual el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito contra la biodiversidad, en la modalidad de poseer ejemplares de una especie acuática sujeta a protección especial, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal, el cual dispone:

86. "Artículo 420.- Se impondrá pena de uno a nueve años de prisión y por el equivalente de trescientos a tres mil días multa, a quien ilícitamente:

87. IV. Realice cualquier actividad con fines de tráfico, o capture, posea, transporte, acopie, introduzca al país o extraiga del mismo, algún ejemplar, sus productos o subproductos y demás recursos genéticos, de una especie de flora o fauna silvestres, terrestres o acuáticas en veda, considerada endémica, amenazada, en peligro de extinción, sujeta a protección especial, o



88. [...]

90. De igual forma, el diverso hecho ilícito por el cual el Juez de Control dictó auto de vinculación a proceso por el hecho que la ley señala como delito de delincuencia organizada, en su modalidad de cometer delitos contra el medio ambiente, previsto en la fracción X del artículo 2, y sancionado en el inciso b), de la fracción II, del numeral 4, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, los cuales establecen:

91. "Artículo 2o.- Cuando tres o más personas se organicen de hecho para realizar, en forma permanente o reiterada, conductas que por sí o unidas a otras, tienen como fin o resultado cometer alguno o algunos de los delitos siguientes, serán sancionadas por ese solo hecho, como miembros de la delincuencia organizada:

92. [...]

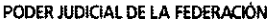
93. X. Contra el Ambiente previsto en la fracción IV del artículo 420 del Código Penal Federal.

94. Los delitos a que se refieren las fracciones previstas en el presente artículo que sean cometidos por algún miembro de delincuencia organizada, serán investigados, procesados y sancionados conforme a las disposiciones de esta Ley".

95. "Artículo 4o.- Sin perjuicio de las penas que correspondan por el delito o delitos que se cometan, al miembro de la delincuencia organizada se le aplicarán las penas siguientes:

96. [...]

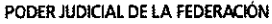
97. II. En los demás delitos a que se refiere el artículo 2o. de esta Ley:



105. Además, los actos realizados y plasmados por los elementos de la Policía Federal Ministerial y de , en el informe policial homologado con terminación 11892/2021 de treinta de julio de dos mil veintiuno y demás datos de pruebas que se destacaron, arrojan de manera lógica y, a nivel de indicio, que los hechos hacen eco en el delito de contra la biodiversidad y en el diverso de delincuencia organizada. De ahí que en su conjunto y como

HARUNIVYONINE TAKASHIMA MEZA
70.69 66 21 61.69 66.00.08 00 00 00 00 00 00 02.34 50
02 08 23 14.54 57

[illegible][illegible][illegible]



111. Que la resolución reclamada es inconstitucional al violentar en su perjuicio los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debido proceso, ya que la autoridad responsable omitió analizar todos los argumentos planteados en el escrito de agravios y que fueron formulados contra el auto de vinculación a proceso en la causa penal 307/2021; sostiene el recurrente que la responsable, al inicio del considerando quinto, señaló que haría un: análisis integral de los agravios precisó cuál era su conclusión en relación con el asunto y señaló que desde su punto de vista, el Juez de origen si actuó con apego a las normas constitucionales y legales al dictar el auto de vinculación a proceso en contra del hoy quejoso, sin embargo, para llegar a dicha conclusión no se apoyó en el análisis de los datos de prueba que fueron expuestos en la audiencia inicial, sino que se derivó de la transcripción de los datos de prueba que fueron expuestos oralmente por la Fiscalía, sin que existiera una verdadera valoración por

parte de la responsable, y muchos menos un análisis completo de los argumentos planteados en el escrito de agravios, en concreto, que omitió contestar agravio formulado respecto a que los domicilios no eran el mismo.

112. Indica que no basta, concluir sin razonar, que al haber hecho el Juez una valoración libre y lógica de los datos de prueba, estos eran idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes para tener por establecidos los hechos, toda vez que era necesaria su propia valoración, decir como la realizó, para de esa manera poder determinar que la valoración que hizo el Juez era la correcta.

113. b) Que la resolución reclamada es inconstitucional ya que la autoridad responsable omitió analizar todos los argumentos planteados en el escrito de agravios y que fueron formulados contra el auto de vinculación a proceso en la causa penal 307/2021, específicamente el agravio plateado en el sentido de que no se demostró la pertenencia del imputado a una organización delincuencial concreta y con ello, violenta en su perjuicio los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debido proceso.

114. Sostiene el impetrante, que en la resolución reclamada la responsable afirmó que con los datos de prueba quedó demostrada la pertenencia, sin embargo, de la lectura de la resolución combatida no se advierten las razones particulares y causas especiales que llevaron a la responsable a concluir que dicha afirmación era correcta, ya que la autoridad responsable realizó lo que desde su punto de vista era el análisis del debate en audiencia y de las razones del Juez de origen para vincular, pero en ninguna parte de su estudio abordó el tema relativo a la pertenencia que era el punto toral de la argumentación en el agravio número dos del escrito de apelación; por lo que la responsable debía hacer un pronunciamiento concreto y no limitarse simplemente a señalar que el Juez sí señaló las causas y razones particulares que demostraban la pertenencia.

115. c) Que la resolución reclamada resulta violatoria de los derechos humanos de fundamentación y motivación, en virtud de la incorrecta valoración que le otorgó la responsable a los datos de prueba que fueron expuestos en la audiencia inicial que se celebró en la causa penal 307/2021.

120. Señala además el recurrente, que durante el desahogo de las audiencias de formulación de imputación y de vinculación a proceso, el Agente del Ministerio Público de la Federación fue reiterativo y enfático en señalar que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio autorizó una orden de cateo en el domicilio que se ubica en calle Mar Blanco número 278-201, en San Felipe, Baja California, con coordenadas geográficas latitud 31.0204210, longitud - 114.8398280, y en el local comercial denominado "abarrotes Rene"; sin embargo, en la audiencia de continuación de vinculación se acreditó de manera fehaciente que el domicilio en donde se ejecutó la orden de cateo se ubica en calle _____, esquina con _____, número _____, en _____, Baja California, el cual no se trata del mismo domicilio; situación que incluso reconoció el propio Juez al señalar que "Si bien existe discrepancia respecto este número, el número que se proporcionó por esta fiscalía que lo es él 278-201"; y no obstante ello, concedió valor probatorio a los medios de prueba localizados al interior del domicilio, obtenidos con violación de derechos fundamentales.

121. e) Que la resolución que ahora se combate resulta violatoria de derechos humanos de fundamentación y motivación contenidos en los artículos 14, 16 y 19 Constitucionales, toda vez que se realizó una indebida valoración del material probatorio que se expuso en la audiencia inicial en la causa penal 307/2021, del índice del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, al considerar que existen datos de prueba suficientes para tener por establecido el hecho que la ley señala como delincuencia organizada, previsto y sancionado en el artículo 2o, fracción X, de la Ley Federal Contra la Delincuencia Organizada.

122. Sostiene, que la figura típica prevista en el artículo 2o de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sanciona la "pertenencia" del sujeto a una organización delictiva cuya finalidad o resultado es realizar determinados delitos, por lo que el actuar reprochable del sujeto se da como un acto instantáneo de formar parte de dicha organización, como el elemento característico del tipo penal que implica pertenencia y, por ende personalísimo de integrar dicho grupo dadas las condiciones respectivas, y ese actuar se realiza de manera individual, sin necesidad de

[illegible]

128. Son infundados los conceptos de violación que formula el quejoso.

130. Respecto de este punto, es necesario destacar que el estudio del acto reclamado se realizará conforme a las cuestiones debatidas en la audiencia de vinculación a



131. Por tanto, el análisis del presente asunto se realizará a partir del contenido de las constancias que remitió la autoridad responsable y del disco óptico que remitió el Juez de Control origen; lo anterior, sin sustituir a la función de la autoridad responsable, solo analizar la legalidad de la ponderación, es aplicable:

ILARI-MI Y'ONNE TAKASSIMA MEZA
70 69 68 20 67 66 65 64 63 62 61 60 59 58 57 56
02 08 23 14 54 57



142. Expuesta la importancia de la congruencia en las resoluciones judiciales, los dos tipos que existen y el precepto en que se encuentra positivizada en la

Constitución, es conveniente traer a contexto en que casos se presenta la incongruencia, los cuales son, a saber:

143. I.El juzgador omite decidir alguna lele las cuestiones oportunamente planteadas por las partes y que sean conducentes a la solución del litigio;

144. II.El juzgador otorga cosa distinta a la
peticionada por la parte o condena a persona no
demandada o a favor de persona que no demandó, yendo
más allá del planteo litigioso

145. III.El juzgador otorga más de lo que fue pretendido por el actor; y

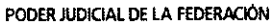
146. IV.Si hay incoherencia entre la motivación y la decisión, siendo contradictorias entre sí, se presenta el caso de la incongruencia interna.

147. Ahora, el principio de exhaustividad está relacionado con el examen que debe efectuar la autoridad respecto de todas las cuestiones o puntos litigiosos, sin omitir alguno, es decir, dicho principio implica la obligación del juzgador de decidir las controversias que se sometan a su conocimiento, tomando en cuenta los argumentos aducidos en los agravios hechos valer oportunamente, de tal forma que se resuelva sobre todos y cada uno de los puntos que hubieran sido materia del debate.

148. Entonces, cuando la autoridad responsable emite su resolución respecto a una pretensión sin resol ver sobre algún punto, resulta contrario al principio exhaustividad.

149. Apoya a lo anterior, por identidad jurídica substancial, la jurisprudencia emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Cuarto Circuito, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, del mes de marzo de 2005, página 959, que se transcribe enseguida:

150. "CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD, PRINCIPIOS DE. SUS DIFERENCIAS Y CASO EN QUE EL LAUDO INCUMPLE EL SEGUNDO DE ELLOS. Del artículo 842 de la Ley Federal del Trabajo se advierte la existencia de dos principios fundamentales o requisitos de fondo que deben observarse en el dictado del laudo: el de congruencia y el de exhaustividad. El primero es explícito, en tanto que el segundo queda imbíbido en la disposición legal. Así, el principio de congruencia está referido a que el laudo debe ser congruente no sólo consigo mismo, sino también con la litis, tal como haya



JEARUN YOUNG TAKASHIMA MIZU
70.66 20.67 60.66 00.00 00.00.00.00 01.00 00.02.54 56
02.08.23.14.54.57

alusión, como lo era la inspección de ese domicilio, y otro que no se precisaba, habida cuenta que el que les ocupaba, era donde se llevó a cabo la detención del señor [redacted], que era precisamente el que se estaba analizando, y que de este acto de investigación, el elemento de la Policía Federal Ministerial destacó haber ubicado el domicilio y que había proporcionado las características de dicho domicilio y las coordenadas geográficas.:

159. Indicó la responsable, que ese acto de investigación, el Juez de Control consideró que se llevó a cabo conforme a sus obligaciones en términos del artículo 132, fracción VII, que establece la obligación de los policías, entre otras, es practicar inspecciones y otros actos de investigación; así como, reportar sus resultados al Ministerio Público y en aquellos que se requiera autorización judicial deberá solicitarla a través del Ministerio Público, y que con motivo de ello fue que se solicitó esa técnica de investigación, e insistió el resolutor en lo que señalaron los testigos protegidos, quienes en su escrito indicaron el domicilio ubicado en [redacted] número [redacted] esquina con [redacted]

160. Preciso la autoridad responsable, que además de ello, el Juez de origen también tomó en consideración que de los datos de prueba que verbalizó el fiscal federal se contaba con la propia acta de cateo ejecutada en el domicilio que fue objeto de la inspección, donde el personal fue atendido por el ahora imputado el señor [redacted] quien permitió el acceso, donde fueron localizadas especies que a la postre fueron consideradas que requieren protección especial, cuya diligencia de cateo que el resolutor apreció que se llevó a cabo en compañía, entre otros, de diversos peritos, como son el perito en materia de fotografía, de criminalística de campo, pericial respecto de delitos ambientales, quienes hicieron referencia a que se constituyeron en el domicilio antes indicado, Ubicado en [redacted] número [redacted], en [redacted] Baja California en las coordenadas geográficas [redacted]

161. Destacó la responsable que lo anterior, permitió al Juez de Control establecer que en términos de los artículos 165, 316, 132, fracción VII, así como el diverso numeral 217, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, existe un registro respecto de actuaciones realizadas durante la investigación de los delitos, donde



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 9/2022-I PENAL

FORMA B-1

confluye esta información de haberse constituido en el domicilio ubicado en calle , número en las coordenadas geográficas antes precisadas.

162. De igual forma, la responsable determinó que de forma correcta el Juez de Control estimó que esa información derivada de los datos de prueba, resultaban lógicos, congruentes y pertinentes, para asignarles valor probatorio, al no haber sido desvirtuados de manera concluyente con la información destacada por la defensa, puesto que la fiscalía invocó otros datos de pruebas e insistió en lo atinente a la técnica de investigación de la cual derivó el cateo que se ejecutó en esa técnica de investigación, e hizo referencia al escrito en que vierten información testigos colaboradores quienes hacen el señalamiento respecto al domicilio ubicado en calle

número esquina con , y posteriormente la policía federal ministerial se constituye al mismo para dar fe de su existencia quienes, en términos de los aludidos numerales, en específico 132 y 217, indicaron en su informe haberse constituido en el domicilio en mención y refirieron que ese mismo domicilio se ubica en las coordenadas geográficas antes destacadas.

163. Por ello, la responsable indicó que el Juez de Control determinó correctamente que si bien la defensa incorporó diversos datos de prueba en los cuales se establece que el número registral corresponde a , esquina con , número más que desvirtuar de manera concluyente lo señalado por la fiscalía en su solicitud, le permitían corroborar los datos que proporcionó la fiscalía tendentes a evidenciar que el domicilio respecto al cual solicitó la técnica investigación y en el que a la postre se ejecutara la misma, fue precisamente en el domicilio ubicado en la calle , esquina con , y que si bien existía discrepancia respecto a este número, pues el número que se proporcionó por la fiscalía es el 278-201, lo cierto era que este se encontraba precisamente en la esquina, y fueron proporcionadas las coordenadas geográficas del mismo.

164. Señaló la responsable que si bien la defensa incorporó diversos datos de prueba de los cuales se establece que el número registral donde se practicó la diligencia de cateo corresponde a , y no a Calle , donde fue autorizado; lo cierto

HARTMUNOSETTAS, ANIMA MEZA
7069 6634063 66 00000000000000000002 54 16
02/08/2023 14:54:47

11ARIINI YVONNE TAKASTHMA MEZA
 70 6a 6b 20 6.1.6a.6b.00.00.00.00 6b 6b 00 01.02 54.56
 02.08 23.14.54.57

11ARIINI YVONNE TAKASTHMA MEZA
 70 6a 6b 20 6.1.6a.6b.00.00.00.00 6b 6b 00 01.02 54.56
 02.08 23.14.54.57

11ARIINI YVONNE TAKASTHMA MEZA
 70 6a 6b 20 6.1.6a.6b.00.00.00.00 6b 6b 00 01.02 54.56
 02.08 23.14.54.57

11ARIINI YVONNE TAKASTHMA MEZA
 70 6a 6b 20 6.1.6a.6b.00.00.00.00 6b 6b 00 01.02 54.56
 02.08 23.14.54.57

11ARIINI YVONNE TAKASTHMA MEZA
 70 6a 6b 20 6.1.6a.6b.00.00.00.00 6b 6b 00 01.02 54.56
 02.08 23.14.54.57

11ARIINI YVONNE TAKASTHMA MEZA
 70 6a 6b 20 6.1.6a.6b.00.00.00.00 6b 6b 00 01.02 54.56
 02.08 23.14.54.57

11ARIINI YVONNE TAKASTHMA MEZA
 70 6a 6b 20 6.1.6a.6b.00.00.00.00 6b 6b 00 01.02 54.56
 02.08 23.14.54.57



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 9/2022-I PENAL

171. De lo anterior se advierte, que contrario a lo que aduce el quejoso, la responsable si dio contestación a los argumentos que formuló, mismos que se precisaron párrafos supra, además de que externó las consideraciones por las cuales las coordenadas geográficas, junto con los datos de prueba que destacó, eran eficaces hasta esta etapa para acreditar, que la diligencia de cateo se llevó en el domicilio respecto del cual fue otorgada la autorización por parte del Juez de Control, para llevar a cabo dicha diligencia, además de que señaló porque no eran suficientes los datos de prueba que ofertó la defensa del quejoso para acreditar la inexistencia del domicilio que sostiene el impetrante.

172. Además, respecto de este punto," es necesario destacar que como se precisó en los párrafos que anteceden, el derecho a la impartición de justicia completa consagrado en el artículo 17 Constitucional, se refiere únicamente a que los aspectos debatidos se resuelvan en su integridad sin que con base en los principios de exhaustividad y congruencia de los fallos judiciales pueda llegarse al extremo de obligar al juzgador a responder todas las proposiciones, una por una, aún cuando fueran repetitivas, ya que como se indicó, ello iría en demérito de otras subgarantías tuteladas por el referido precepto constitucional —como las de prontitud y expeditéz— y del estudio y reflexión de otros asuntos donde los planteamientos exigen la máxima atención y acuciosidad judicial.

173. De ahí que como se adelantó, resultan infundados los conceptos de violación marcados con los incisos a), c) y d).

174. Por otra parte, resultan infundados los conceptos de violación que formula la parte quejosa, marcados con los incisos b) y d), en los que en esencia, el impetrante hace argumentos para combatir el hecho que la ley señala como el delito de delincuencia organizada, en específico, el elemento de pertenencia.

175. Lo anterior, es así ya que contrario a lo que aduce el quejoso, la autoridad responsable sí estableció el por qué con los datos de prueba que expuso el Fiscal de la Federación se acreditó dicho elemento, ya que como se advierte de la resolución que constituye el acto reclamado, la responsable estableció que contrario a lo aducido por el

HAKIMI Y VONNE TAKASHIMA MEZA
70 62 66 20 67 6a en 00.00 00.00 00.00 00.00 00.00 02.54 56
02.08 23 14.54.57

protección especial, de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010.

185. Sostuvo la responsable, que tales datos de prueba revelan de manera indiciaria que el imputado de mérito pertenece a esa organización criminal al menos desde el dos mil dieciocho, realizando actos de pesca furtiva y comercio de buche de totoaba desde su domicilio ubicado en Calle _____, Número _____ en el municipio de _____, México, con coordenadas geo referenciales latitud 31.0204210, longitud 114.8398280; siendo su intervención como autor directo, esto es, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 13, fracción II, del Código Penal Federal; asimismo, a título doloso, acorde a los artículos 7, 8 y 9 todos del Código Penal Federal.

187. De lo anterior se aprecia, que contrario a lo que sostiene el quejoso, la responsable si efectuó un análisis y expuso las consideraciones por las cuales estimó, que fue correcta la determinación del Juez de Control al establecer que con los datos de prueba que expuso el Fiscal de la Federación, consistentes en copia de la técnica de investigación número 62/2021, de veintiocho de julio de dos mil veintiuno, acta circunstanciada de cateo, informe policial por parte de la Policía Federal Ministerial, oficio WEIPO-A-EILV-C6-006/2021 de fecha treinta y uno de julio de este año, oficio WEIPO-A-EILV-C3-167/2021 de fecha treinta y uno de julio de este año, copia de técnica de investigación de intervención de comunicaciones privadas número 504/2021, técnica de investigación, oficio

199. En esa intelección, al no existir violación a los derechos fundamentales que se protegen en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y al no advertirse algún motivo para suplir la deficiencia de la queja en su favor, aunado a que tampoco se advierte en el presente asunto alguna violación a los derechos humanos reconocidos por la Constitución y Tratados Internacionales en los que México es parte; se niega el amparo y la protección constitucional solicitada por

200. Finalmente, es oportuno precisar que las tesis que se citan en esta determinación, si bien hacen referencia a preceptos de la Ley de Amparo vigente hasta el dos de abril de dos mil trece, también es cierto que las mismas no se oponen a los preceptos de la nueva Ley de Amparo; lo anterior de conformidad con- el artículo sexto transitorio de ésta.

201. Por lo anteriormente expuesto y fundado, con apoyo en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos de la Ley de Amparo, se

202. RESUELVE

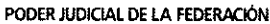
203. PRIMERO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a , contra el acto reclamado a la autoridad responsable, por los motivos expuestos en el último considerando de esta sentencia.

204. SEGUNDO. Publíquese esta ejecutoria con supresión de los datos personales y confidenciales de las partes, en virtud de no existir en autos autorización expresa de su parte con tal publicación, ello de acuerdo con lo que establecen los artículos 1, 9, 16, 98 fracción III, 110, 113, 117 al 120, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación a los diversos numerales 6 y 7, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.

205. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.”.

206. CUARTO. Los agravios expresados por el recurrente, son los siguientes:

207. “PRIMERO.- La sentencia que se combate irroga perjuicios a mi representado en razón de que a lo largo de la



214. En la página 28 de la sentencia indicó: "...III. Valoración de los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público: como de forma

correcta lo sostuvo la autoridad responsable, al dictar el auto de vinculación a proceso el siete de agosto de dos mil veintiuno..."

215. En la página 33 de la sentencia se advierte: "...De lo anterior; este Tribunal de Amparo considera que como lo determinó de forma correcta la autoridad responsable en la resolución que constituye el acto reclamado en el presente asunto..."

216. En la página 36 de la sentencia se observa: "...De ahí que en su conjunto y como correctamente lo determinó la autoridad responsable, el Juez de origen acertó en tener por demostrado de indiciariamente el hecho que la ley señala como delito..."

217. En la misma página 36 de la sentencia se señaló: **"...Respecto a la probable participación del quejoso en los hechos ilícitos acreditados de manera indiciaría, este Tribunal concluye que fue correcta la determinación de la responsable al establecer en la resolución que aquí se analiza..."**

218. Al igual que las anteriores, podemos observar expresiones similares en las páginas 37, 48, 62, 63, 64, 72, 74 y 80 de la sentencia que se recurre.

219. Ante esta situación, con la finalidad de reparar el agravio causado a mi representado se solicita al Tribunal Colegido de Circuito se sustituya al Tribunal de primera instancia constitucional y realice el estudio relativo a la violación de derechos fundamentales que se planteó en la demanda de amparo y que el Segundo Tribunal Unitario lo llevó a cabo. Asimismo, dado que al ser un asunto de naturaleza penal el estudio debe ser integral, en suplencia de la deficiencia de la queja se analice la totalidad de la audiencia inicial y se tengan como referencia los argumentos de defensa que se ahí se emitieron, como en los distintos medios de impugnación ordinarios y extraordinarios.

220. SEGUNDO.- Causa agravio la manifestación del Tribunal de Amparo (Segundo Tribunal Unitario) en el sentido de que los datos de prueba "no fueron refutados por la defensa como se verá en el apartado siguiente".

221. Dicha manifestación la realizó en el segundo párrafo de la página 37 que es del tenor siguiente:

222. "...De lo anterior se advierte, que la probable participación del quejoso en los hechos ilícitos, se dio



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

Constitucional, incluso citando la tesis de Jurisprudencia 1a./J.28/2020, con registro digital 2022178.

234. Sin embargo, perdió de vista que dicha tesis no le resulta aplicable a la responsable como Tribunal de Segunda Instancia (Primer Tribunal Unitario), pues al no existir reenvío en el Código Nacional de Procedimientos Penales, dicho tribunal debía asumir completa jurisdicción y realizar su propia valoración de los datos de prueba expuestos en la audiencia inicial.

235. En ese orden de ideas, como se señaló en el concepto de violación la responsable omitió señalar las razones particulares y causas inmediatas que le llevaron a emitir su resolución, de lo cual debió percatarse el Segundo Tribunal Unitario de Circuito, en su calidad de Tribunal de Control Constitucional.

236. En relación con lo anterior, es oportuno señalar que la apelación constituye el recurso vertical más importante de los regulados por el Código Nacional de Procedimientos Penales, pues a través de él se pueden impugnar, entre otras resoluciones, las que generen un agravio a las partes o las señaladas en la legislación.

237. Así, los recursos verticales, también conocidos como de alza o de segunda instancia, tienen como característica primordial que su conocimiento y resolución corresponden a un tribunal superior de instancia del juzgador que emitió la resolución materia de la impugnación.

238. Ahora bien, conforme a la doctrina procesal, el tribunal de alza o de segunda instancia es quien tiene la jurisdicción originaria para resolver la controversia de que se trata, pero la delega en un juzgador de primer grado quien, por virtud de ello, se encargará de sustanciar el proceso y emitir una resolución que dirima la contienda, pero si a través del estudio de los agravios aquél llega a determinar que son erróneas o incongruentes las consideraciones emitidas por el juzgador de primer grado, reasumirá su jurisdicción originaria para juzgar el asunto y dictará la resolución que corresponda en sustitución de la recurrida.

239. Ello origina que en los recursos de alza no proceda el reenvío, pues una vez detectada la infracción en que hubiese incurrido el juzgador primario, el tribunal de alza no puede devolverle el asunto a éste para que emita otra resolución en la que repare la violación en que incurrió,

11/01/2022 11:44:57
70.69.66.20 67.69.66.00 60.60.00.00 00.00.00.00 00.00.00.54 56

sino que debe reasumir la jurisdicción que le corresponde y emitir la nueva decisión.

240. Lo anterior tiene como excepción los casos en que se deba desahogar un medio de prueba debidamente ofertado en la audiencia inicial, pues en esa hipótesis se debe revocar la determinación impugnada y ordenar al juzgador primario que lleve a cabo los actos procesales procedentes y se cumpla con los principios de inmediación y de contradicción, si no son de aquellos que, conforme a la legislación procesal, deban efectuarse por el propio tribunal de alzada antes de dictar la sentencia de apelación de fondo.

241. Así, a través de la interposición del recurso de apelación, los recurrentes se "alzan" a fin de que el tribunal de segundo grado revise la legalidad de la decisión del juzgador primario.

242. De acuerdo con la mecánica que se comenta, la sentencia que se dicte en el juicio, así como cualquier resolución intermedia que emita el Juez de primer grado y que pueda ser impugnable en apelación - según el tipo de resolución de que se trate y la naturaleza del juicio respectivo-, constituirá una decisión preliminar, pues si las partes la recurren a través de un recurso vertical, la resolución que emite el tribunal de alzada sustituye procesalmente a la impugnada.

243. De esa forma, las decisiones del Juez primario sólo adquieren firmeza si las partes no las recurren en el plazo previsto en la legislación correspondiente, pues si las impugnan a través de un recurso de alzada, entonces, dado el fenómeno de sustitución procesal que opera en este tipo de recursos, lo que adquiere firmeza -por ministerio de leyes la resolución emitida por el tribunal de alzada.

244. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada que emitió el Cuarto Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito, que a continuación de transcribe:

245. "Registro digital: 2020692

246. Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

247. Décima Época

248. Materias(s): Penal

249. Tesis: XV.4o.9P (10a.)

250. Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 10, Septiembre de 2019, Tomo III, página 2207



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

251. Tipo: Aislada

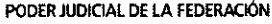
252. RECURSO DE APELACIÓN EN EL PROCESO PENAL DE CORTE ACUSATORIO. SI AL CONOCER DEL INTERPUESTO CONTRA EL AUTO DE VINCULACIÓN O DE NO VINCULACIÓN A PROCESO, EL TRIBUNAL DE ALZADA ADVIERTE UNA INDEBIDA VALORACIÓN DE LOS DATOS DE PRUEBA, AL REASUMIR JURISDICCIÓN DEBE EMITIR LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE Y NO ORDENAR LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. De la interpretación sistemática de los artículos 475, 476, 477, 478, 479, 480 y 482 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se advierte que el tribunal de alzada puede refrendar las consideraciones adoptadas por el juzgador; cambiar algunos razonamientos o resolver en sentido adverso, a partir de la revisión de la racionalidad de los argumentos expresados por el tribunal de enjuiciamiento, con base en la inconformidad planteada en los agravios y emitirla decisión que sustituya a la impugnada, al no existir la figura del reenvío en materia penal. ya que el análisis es acerca de la legalidad de los razonamientos utilizados por el Juez natural al momento de emitirla resolución impugnada, ponderando las reglas de la lógica y las máximas de la experiencia, para determinar si fue correcta o incorrecta su decisión y no sobre la infracción a un derecho fundamental que amerite la reposición del procedimiento, sin que dicho proceder transgreda el principio de inmediación, ya que el artículo 468 del código referido que trata de las resoluciones del tribunal de enjuiciamiento apelables, en su fracción II, correspondiente a las sentencias definitivas, señala que se puede entrar a las consideraciones contenidas en la propia resolución definitiva: "...distintas a la valoración de la prueba siempre y cuando no comprometan el principio de inmediación...", circunstancia que, por identidad de razón, permite al tribunal de apelación examinar el fondo del recurso interpuesto contra el auto de vinculación o de no vinculación a proceso, a través de lo cual podrá establecerse si el juzgador sustentó su decisión sobre bases racionales idóneas para hacerla aceptable, bajo los principios de la valoración lógica (principios de identidad, contradicción, tercero excluido

y razón suficiente), de las máximas de la experiencia (conocimientos ordinarios del quehacer cotidiano en las actividades genéricas del ser humano mediante la observación de los fenómenos sociales, culturales, políticos y de la naturaleza) y del conocimiento científico, y no ordenar la reposición del procedimiento, para prescindir de datos de prueba ya desahogados ante el Juez y emitir únicamente por escrito su decisión."

253. CUARTO.- El Tribunal de amparo incurre en el mismo vicio que se le atribuyó a la responsable en el sentido de que se limita a realizar una relación de datos de prueba que fueron expuestos ante el Juez de Control, aunque ahora el tribunal de amparo lo hace para simplemente concluir que fue correcta la determinación de la responsable (Primer Tribunal Unitario).

254. En el concepto de violación que el Segundo Tribunal Unitario en la sentencia que se combate resume como el marcado con el inciso a) se planteó lo siguiente:

255. "Que la resolución reclamada es inconstitucional al violentar en su perjuicio los derechos fundamentales de tutela judicial efectiva y debido proceso, ya que la autoridad responsable omitió analizar todos los argumentos planteados en el escrito de agravios y que fueron formulados contra el auto de vinculación a proceso en la causa penal 307/2021; sostiene el recurrente que la responsable, al inicio del considerando quinto, señaló que haría un análisis integral de los agravios, precisó cuál era su conclusión en relación con el asunto y señaló que desde su punto de vista, el Juez de origen si actuó con apego a las normas constitucionales y legales al dictar el auto de vinculación a proceso en contra del hoy quejoso, sin embargo, para llegar a dicha conclusión no se apoyó en el análisis de los datos de prueba que fueron expuestos en la audiencia inicial, sino que se derivó de la transcripción de los datos de prueba que fueron expuestos oralmente por la Fiscalía, sin que existiera una verdadera valoración por parte de la responsable, y muchos menos un análisis completo de los argumentos planteados en el escrito de agravios, en concreto, que omitió contestar agravio formulado respecto a que los domicilios no eran el mismo.



262. Para sustentar lo anterior, a continuación, se mencionarán los argumentos que se plantearon en relación con la ejecución de una orden de cateo en un domicilio distinto al que se autorizó.

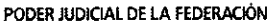
263. Al efecto, en el escrito de apelación esencialmente se argumentó lo siguiente:

265. Esto es así pues durante el desahogo de las audiencias de formulación de imputación y de vinculación a proceso el Agente del Ministerio Público de la Federación fue reiterativo y enfático en señalar que el Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio autorizó una orden de cateo en el domicilio que se ubica en:

267. Sin embargo, en la audiencia de continuación de vinculación se acreditó de manera fehaciente que el domicilio en donde se ejecutó la orden de cateo se ubica en:

269. Situación que incluso reconoció el propio juzgador al señalar: "Si bien existe discrepancia respecto este número, el número que se proporcionó por esta fiscalía que lo es el 278-201"; y no obstante ello, concedió valor probatorio a los medios de prueba localizados al interior del domicilio, obtenidos con violación de derechos fundamentales.

271. "De igual forma, si bien de la transcripción anterior se advierte que la defensa incorporó diversos datos de prueba de los cuales se establece que el



275. Esto es, de la lectura de la respuesta que intenta dar a lo que la propia responsable denominó como primer concepto de agravio, se puede advertir que se centra en construir un argumento en el sentido de que la orden de cateo que se autorizó para el domicilio ubicado en calle número _____, esquina con _____, en la ciudad de _____ Baja California, corresponde con el domicilio en el cual se ejecutó la misma y que es el ubicado

HARDING YOUNG TANAKHIMA MEZA
71.62 66 20 65 68 66 69 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02 54 56
02 08 23 14.54.57



283. En relación con el concepto de violación que se transcribió con antelación, hasta el momento no existe una argumentación concreta que conteste el planteamiento relativo a que las coordenadas que se indicaron en la orden de cateo corresponden a otro domicilio, es decir, son un complemento de identificación del domicilio.

285. Basta observar la transcripción que realizó la responsable del dato de prueba consistente en la declaración de los testigos colaboradores y para percatarse que en ningún momento mencionaron coordenadas geográficas, sino la ubicación de un domicilio del que en la continuación de la audiencia inicial se demostró que no existe.

287. En ese tenor, también causa agravio la resolución que se combate en razón de que tampoco se dio contestación al argumento en el sentido de que la certeza jurídica que debe existir en relación con una orden de cateo debe ser ex ante y no ex post como indebidamente lo considera tanto el Juez de Distrito, el Tribunal de apelación y no lo contesta el tribunal de amparo.

HAKIMI YONUL TASASLIM ATEZA
70.60 66.20 63.63 66.00 60.00 60.00 60.00 60.00 62.54 5
02.08 25 14.54.57

responsable) sin realizar un verdadero análisis del que pudiera llegarse a la conclusión de que es factible, posible y constitucional introducirse a un domicilio particular aunque la dirección no sea la misma respecto a la que se autorizó en la orden de cateo, que únicamente se le parezca o que se pretenda corroborar una vez ejecutado el mismo.

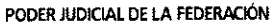
289. Por consiguiente, con la finalidad de reparar la serie de violaciones planteadas en el presente agravio se solicita al Tribunal Colegiado realice un análisis pormenorizado de la audiencia inicial que dio origen a la serie de medios de impugnación que se han interpuesto en el presente asunto, y advierta que desde la continuación de la audiencia inicial se debió dictar un auto de no vinculación a proceso, o bien, en suplencia de la deficiencia de la queja verifique la totalidad de constancias que obran en la causa de origen y sus respectivos medios de impugnación y se constate que han existido violaciones evidentes a los derechos fundamentales de mi representado.

290. SEXTO.- Causa agravio la sentencia que se combate cuando en la misma se señala que la autoridad responsable sí estableció el porqué con los datos de prueba que expuso el fiscal de la federación se estableció el elemento de pertenencia en el delito de delincuencia organizada.

291. Al efecto, el tribunal de amparo señala lo siguiente:

292. "Por otra parte, resultan infundados los conceptos de violación que formula la parte quejosa, marcados con los incisos b) y d), en los que en esencia, el impetrante hace argumentos para combatir el hecho que la ley señala como el delito de delincuencia organizada, en específico, el elemento de pertenencia.

293. Lo anterior; es así ya que contrario a lo que aduce el quejoso, la autoridad responsable sí estableció el por qué con los datos de prueba que expuso el Fiscal de la Federación se acreditó dicho elemento, ya que como se advierte de la resolución que constituye el acto reclamado, la responsable estableció que contrario a lo aducido por el recurrente, de los registros de audio y video de la audiencia en que se emitió la resolución impugnada, se revela que el Juez de Control razonó adecuadamente su ejercicio de ponderación de los datos de prueba expuestos por el Ministerio Público



298. "Art. 19.- Ninguna detención ante autoridad judicial podrá exceder del plazo de setenta y dos horas, a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan Que se

HARMONYCONE TAN-ASIMMA MEZA
76.69 66.20 61.62 60.00 60.00 (80) 60 (80) 11.11 12.54 56
02 08 25 14 54 57



312. "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL). Del artículo 19, párrafo primero, de la Constitución Federal, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 18 de junio de 2008, se desprende que para dictar un auto de vinculación a proceso es necesario colmar determinados requisitos de forma y

HARIMAYOONE TAKUSHIMA MEZA
70.62.66.20.63.69.69.00.00.00.00.00.00.02.54.56
02.08.23.14:54:57

intención de los sujetos (tres o más) de organizarse de hecho de manera permanente o reiterada con el propósito abstracto de cometer delitos y en cada uno la pertenencia voluntaria en esa agrupación, es decir, debe al menos quedar establecido indiciariamente que sabían que la configuración y organización de sus asociados eran con el fin de delinquir, y que su intención fue formar parte de ésta (ya sea habitual u ocasionalmente) compartiendo su finalidad, esto es, que estaban dispuestos a participar en delitos aún no determinados específicamente, pues se trata de un delito doloso por excelencia y de peligro abstracto.

322. En el caso concreto, y atendiendo a la fase procesal en la que se dictó la vinculación a proceso, dicha demostración debía ser al menos de carácter indiciario, no obstante que para vincular a proceso a una persona el estándar probatorio que se requiere sea bajo, pues ello no significa que no deba existir prueba con la que de manera lógica se tenga por establecido el hecho que la ley señala como delito, en el caso, de delincuencia organizada. Lo cual no se colma con la relación aislada de datos de prueba de los que no se desprende en concreto la pertenencia de mi representado a alguna organización criminal en concreto.

323. Ahora, la figura típica de delincuencia organizada se actualiza una forma de autoría material, ya que, para su configuración desde un punto de vista de la responsabilidad, no es necesario un reparto de tareas o distribución de actividades para su realización, únicamente se requiere de su actuar "por sí" dentro de la organización delictiva.

324. En efecto, en la delincuencia organizada los miembros institucionalmente activos, se corresponden con los fines de la organización que exige una actualización clara y permanente de pertenencia, un comportamiento de tal modo que su conducta pasa a ser relevante a la organización.

325. Pero a su vez, su injusto no deriva ni depende de los delitos-fin que los miembros de la asociación delictiva quieren realizar, sino que ex ante constituye un delito autónomo, que tiene un contenido de injusto propio, diferenciado de los injustos de los delitos-fin, ya que no es necesaria la realización de este último para la actualización del delito de delincuencia organizada.

326. Esto es, según la tipología, se está ante un delito impropio de estatus, el cual se sanciona por el hecho de



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 9/2022-I PENAL

agruparse o asociarse con otros con un fin delictivo, por lo que se forma una colectividad, con independencia de que realicen o no los delitos que pretenden llevar a cabo.

327. Por lo que en este tipo penal se sanciona la pertenencia y no el resultado de la finalidad o la actividad de la agrupación delincuenciales organizada orientada a cometer delitos (alguno de los previstos en el párrafo segundo del artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada).

328. Lo anterior, indica su autonomía frente al delito-fin, ya que no es necesario que se lleve a cabo alguno de los delitos descritos en la ley especial en comentario.

329. Tal afirmación es compatible con el entorno internacional, en concreto en el artículo 2o., la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Transnacional Organizada, se define a la delincuencia organizada como **"grupo estructurado de tres o más personas que existe durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material"**.

330. En tal sentido, la figura típica prevista en el artículo 2o. de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, sanciona la "pertenencia" del sujeto a una organización delictiva cuya finalidad o resultado es realizar determinados delitos.

331. Por lo cual el actuar reprochable del sujeto se da como un acto instantáneo de formar parte de dicha organización, como el elemento característico del tipo penal que implica pertenencia y, por ende, personalísimo de integrar dicho grupo dadas las condiciones respectivas, y ese actuar se realiza de manera individual, sin necesidad de división de actos conformadores de la efectiva comprensión de la conducta punible.

332. Esta organización antisocial en cuanto a la responsabilidad de cada uno de sus integrantes se verifica de manera individual, en función de su aportación concreta, esto es, de su carácter de pertenencia a la institución organizada delictiva: sin que sea dable confundir la pluralidad de sujetos necesarios para la conformación del tipo con la forma de participación de cada uno de sus

integrantes, ya que sería tanto como afirmar que la calidad cuantitativa del tipo penal determina la forma de intervención de los sujetos activos, lo cual es claramente incorrecto, ya que la forma de participación no se erige como elemento típico.

333. Por lo que la determinación del injusto se proyecta sobre los delitos futuros, cuya comisión por parte de la organización se teme. La mera existencia de la organización delictiva en sí constituye una "fuente de peligro incrementado" ante la latente posibilidad o finalidad de cometer algún delito de los previstos en la propia Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; por lo que el responsable actúa a título de autor, en razón de su libre decisión de pertenecer a la organización criminal.

334. Por ende, es evidente que respecto al grado de intervención de cada uno de los miembros del grupo delincuencial organizado será autor de hecho por la simple acción típica de "pertenecer" o formar parte de manera individual en la organización delictiva a la que hace referencia el artículo 2o., párrafo primero, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada.

335. En ese contexto, se puede apreciar que existió la violación de derechos fundamentales cuando el Juez de Control realizó una indebida valoración de los datos de prueba que expuso el agente del Ministerio Público de la Federación al momento de la audiencia inicial, pues si bien se hizo relación de varios datos de prueba, lo cierto es que con ninguno de ellos se logra establecer al menos de manera indiciaria que mi representado pertenece y forma parte de una organización de hecho que tiene la intención de llevar a cabo un tipo particular de hechos constitutivos de delito, mucho menos de la organización delictiva que menciona el Fiscal Federal.

336. Lo que debió ser apreciado por la autoridad responsable, y en caso, considerado por el Segundo Tribunal Unitario del Decimoquinto Circuito, al momento de dictar la sentencia que ahora se combate.

337. Siendo importante destacar que la relación indiscriminada de datos de prueba desvinculados entre sí, no pueden servir de base para generar un indicio válido que pueda ser tomado en cuenta.

338. Es decir, incorrectamente el Juez de Control, el Tribunal de Apelación y el Tribunal de Amparo, distorsionan



339. Para una mayor claridad a continuación hago una relación de los datos de prueba que tomó en consideración el Juez de Control y que simplemente reiteraron los Tribunales Unitarios, para tener por establecido el hecho y la responsabilidad del delito que nos ocupa:

341. Que en el mismo oficio se remitió el escrito signado por los testigos colaboradores de nombre Susana y Carlos (el Juez no señala ni la fecha, ni el lugar en el que se desahogó dicho acto de investigación).

343. La técnica de investigación de intervención de comunicaciones privadas 504/2021, del índice del Juzgado Cuarto de Control del Centro Nacional de Justicia Especializado en Control de Técnicas de Investigación, Arraigo e Intervención de Comunicaciones con Competencia en toda la República Mexicana y con sede en la Ciudad de México, respecto de la cual el Juez únicamente señaló que: "se hizo claro las diversas escuchas" (sin señalar si en alguna de ellas se identificaba a mi representado).

345. Que no se requiere prueba plena para acreditar la existencia de una organización criminal para esta fase procesal.

346. Que de los datos de prueba que se invocaron precedentemente (los que se describieron con antelación)

se destaca la existencia de esta organización criminal (sin referirse a qué organización).

347. Que de los datos de prueba se destaca la mención de que el señor [REDACTED] pertenece a la misma al menos desde el año de dos mil dieciocho (lo cual no se advierte de ninguno de los datos de prueba, ni siquiera del testimonio de los testigos colaboradores).

348. Como puede observarse de las puntualizaciones anteriores, existe violación de derechos fundamentales en contra de mi representado puesto que el Juez de Control no realiza una verdadera valoración de los datos de prueba que fueron invocados por la Fiscalía Federal, pues no señala las causas especiales y razones particulares del porqué considera que mi representado debía considerarse como perteneciente a la organización criminal cartel del mar o de la totoaba.

349. En el mismo sentido tampoco lo hizo el Tribunal de apelación, y tampoco lo apreció como violatorio de derechos fundamentales el Tribunal de amparo, limitándose éstos a indicar que la relación de constancias y la valoración del Juez de Control fue correcta, cuando se demostraba que no había datos de prueba de los cuales válidamente se pudiera desprender que mi representado perteneciera a alguna organización criminal, con independencia de la existencia o no de la misma.

350. Esto es así, pues aun cuando haya manifestado que no se requiere prueba plena para acreditar la existencia de una organización criminal, lo cierto es que sí estaba obligado a señalar con qué medios de prueba se tenía por establecida dicha organización.

351. Como se precisó desde un inicio ante el Tribunal de apelación, lo anterior no significa que el suscrito considere que el Juzgador debía estudiar todos y cada una de los elementos del delito de delincuencia organizada, pero para tener por establecido el hecho que se imputaba a mi representado, resulta necesario que al respecto existiera un pronunciamiento, pues de no existir, resulta evidente que no se tendría por establecido el hecho.

352. En ese sentido se debe leer la jurisprudencia 35/2017 transcrita con antelación, cuando señala que "basta con que el juez encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar; independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable."



370. Por otra parte, el Fiscal Federal en relación con el mismo oficio UEITMPO-A-EILV-C3-167/2021, de fecha treinta y uno de julio de dos mil veintiuno, hizo referencia al estado procesal de la carpeta de investigación 773/2021,

HARUMI YVONNE TAKASHIMA MF2A
71 69 66 29 63 68 65 66 00 00 00 00 00 00 00 00 02 54 56
02 08 25 14 54 57

381. El Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio, en funciones de Juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, en continuación de la audiencia inicial celebrada el seis de agosto de dos mil veintiuno y concluida el siete del mes y año en mención, vinculó a proceso a [REDACTED] dentro de la causa penal 307/2021 instruida por la probable comisión del hecho que la ley señala como delito contra la biodiversidad, en la modalidad de poseer ejemplares de una especie acuática sujeta a protección especial, previsto y sancionado en el artículo 420, fracción IV, del Código Penal Federal y el diverso ilícito de delincuencia organizada, en su modalidad

AMPARO EN REVISIÓN 9/2022-I PENAL



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

de cometer delitos contra el medio ambiente, previsto en la fracción X del artículo 2, y sancionado en el inciso b), de la fracción II, del numeral 4, todos de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada; cometidos en términos de los artículos 13, fracción II, 7, 8 y 9, párrafo primero, todos del Código Penal.

382. Inconforme con dicha determinación, el defensor particular del imputado Licenciado [REDACTED] interpuso recurso de apelación el cual por razón de turno fue del conocimiento del Primer Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito con residencia en esta ciudad y mediante resolución de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictada dentro del recurso de apelación 42/2021 **confirmó** la determinación recurrida.

383. En desacuerdo con lo anterior, el defensor particular del imputado Licenciado [REDACTED] promovió juicio de amparo indirecto el cual por razón de turno tocó conocer al Segundo Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito; mediante auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno se admitió bajo el número 18/2021. Entre

otras cosas, se solicitó al tribunal responsable remitiera la certificación a que hace alusión el artículo 14 de la Ley de Amparo, proveído que fue notificado de manera personal en el Centro de Reinserción Social con sede en esta ciudad al imputado, por correo electrónico a su defensor y de manera personal al agente del Ministerio Público tal como se desprende a fojas ciento trece, ciento catorce y ciento cinco, respectivamente, del expediente del juicio de amparo indirecto.

384. El veinticinco de octubre de dos mil veintiuno se tuvo a la autoridad responsable Magistrada del Primer Tribunal Unitario del Décimo Quinto Circuito **rindiendo el informe justificado** así como lo relativo a la certificación solicitada, proveído que se ordenó notificar a las partes, lo cual se **realizó por medio de lista** el veintiséis de octubre de dos mil dieciséis, así como por correo electrónico al defensor particular y al agente del Ministerio Público, fojas ciento dieciséis y seiscientos cincuenta y tres a la seiscientos cincuenta y cinco del juicio de amparo indirecto.

HARDING YVONNE TAKASHIMA MEZA
70 60 60 20 61 60 66 00 00 00 00 00 00 00 00 02 54 50
02 08 23 14:54:57

391. "...Artículo 93. Al conocer de los asuntos en revisión, el órgano jurisdiccional observará las reglas siguientes:

393. IV. Si encontrare que por acción u omisión se violaron las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo, siempre que tales violaciones hayan trascendido al resultado del fallo, revocará la resolución recurrida y mandará reponer el procedimiento;...”

86



397. Ahora bien, para evidenciar lo anterior es dable precisar que de los autos del juicio de amparo de origen, se advierte que la parte quejosa **se encuentra privada de su libertad** tal y como así se desprende de la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva (foja cuatrocientos cincuenta y cinco) e incluso de las notificaciones personales del auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno

ILARION YEVGENEY TAKASHIMA MEZA
70 63.06 20.63 63.06 00 00 00 00 00 00 00 00 02 24 56
02 08 23 14 54 57



403. Sin embargo, se omitió ordenar la notificación en forma personal al peticionario de amparo, sin que obste el hecho de que en el escrito de demanda se haya señalado el domicilio ubicado en _____ número _____, entre calle _____ y _____, así como los correos electrónicos _____ y _____, porque tal cuestión en todo caso únicamente da lugar a que, precisamente, esas notificaciones personales se lleven a cabo en tal domicilio y no en el centro de reclusión, pues de una interpretación pro persona, podría haber ordenado que se llevaran a cabo en ambos lugares, **pero invariablemente de forma personal**, lo cual no lo realizó.

404. Resulta aplicable al caso, la tesis (II Región) 1o.4 K (10a.), del Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Segunda Región, que se comparte, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 66, mayo de 2019, tomo III, página 2657, con número de registro 2019918, de rubro y texto siguientes:

HARIM YVONNE TAKASHIMA MEZA
70.6n.66.20.63.69 66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.54.5
02.08.23.14.4.57



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

AMPARO EN REVISIÓN 9/2022-I PENAL

controvertir una decisión que tenga como desenlace un contexto desfavorable”.

406. Así, la violación procesal advertida trascendió al resultado del fallo, en la medida en que, el quejoso teniendo el derecho de ser notificado personalmente de todas las providencias del amparo indirecto, **incluyendo desde luego la recepción de los informes justificados** (de veinticinco de octubre de dos mil veintiuno), no fue notificado de manera personal, pues como quedó evidenciado en párrafos anteriores, tal notificación fue realizada por medio de lista, lo que le impidió, en su caso, alegar lo que a su derecho conviniera; de todo lo cual se vio privado el peticionario de amparo que obtuvo una resolución desfavorable a sus intereses.

407. En efecto, debió ponderar la situación vulnerable del quejoso al encontrarse privado de su libertad y ordenar se realizará la notificación del referido proveído de manera personal en el centro de reclusión citado, con independencia que haya nombrado abogados en amplios términos según la legislación de la materia.

HARINI YVONNE TAKASHIMA MEZA
70.62.66 20 63 64 66 69.00.00.00 00 00 00 00 02.54 56
02.08 23 14.54 57

410. Además, el numeral 119³ de la Ley de Amparo, establece que serán admisibles toda clase de pruebas,

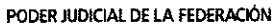
2 "Artículo 111. Podrá ampliarse la demanda cuando: I. No hayan transcurrido los plazos para su presentación; II. Con independencia de lo previsto en la fracción anterior, el quejoso tenga conocimiento de actos de autoridad que guarden estrecha relación con los actos reclamados en la demanda inicial. En este caso, la ampliación deberá presentarse dentro de los plazos previstos en el artículo 17 de esta Ley. En el caso de la fracción II, la demanda podrá ampliarse dentro de los plazos referidos en este artículo, siempre que no se haya celebrado la audiencia constitucional o bien presentar una nueva demanda"

Las pruebas deberán ofrecerse y rendirse en la audiencia constitucional, salvo que esta Ley disponga otra cosa...”,

414. "INFORME JUSTIFICADO. SU FALTA DE CONOCIMIENTO POR EL QUEJOSO, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. De acuerdo con el primer párrafo, del artículo 149 de la Ley de Amparo, los informes con justificación rendidos por las respectivas autoridades responsables, se harán del conocimiento del quejoso al menos ocho días antes de la fecha para la celebración de la audiencia constitucional, por lo que si los informes con justificación en ningún momento se hacen del conocimiento del quejoso, máxime que los mismos se agregan al juicio hasta el día de la audiencia constitucional, es claro que con esa conducta adoptada, se actualiza una flagrante violación procedimental del juicio de amparo y, por tanto, no se puede imponer al quejoso la carga de la prueba de los hechos en que se determine la inconstitucionalidad del acto reclamado, y que en la especie lo constituye el auto de formal prisión que en sí mismo no es violatorio de garantías, a mayor razón que el quejoso se encuentra privado de su libertad y la demanda de amparo la promovió por su propio derecho, sin haber autorizado a ninguna persona para oír y recibir notificaciones, tampoco hay constancia de que el juez de Distrito haya pedido su excarcelación para que estuviera presente si así lo deseaba en la celebración de la audiencia constitucional".

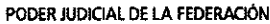
415. Resulta aplicable la Tesis Aislada I.11o.C.27 K (10a.), Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Décima Época, Materia: Común, Registro: 2016464, Libro 52, Marzo 2018, Tomo IV, página 3424, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto siguiente:

416. "NOTIFICACIONES EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO POR UN QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD. SIN IMPORTAR LA MATERIA, DEBEN REALIZARSE PERSONALMENTE TODAS LAS DETERMINACIONES EMITIDAS DURANTE SU TRAMITACIÓN. El artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo dispone: "Las notificaciones en los juicios de



417. En las relatadas consideraciones, procede revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que el Tribunal de Amparo, ordene que se notifique en forma personal al quejoso en el lugar de reclusión del promovente del amparo.

HARINAMI YUJUNNE TAKASHIMA MEZA
70.63 66.79 67.62 66.00 00.00 00.00 00.00 00.00 01.02 53.5
42-08-23 14:54:57



RESUELVE:

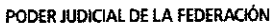
PRIMERO. Se **REVOCA** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. Se ordena **REPONER EL PROCEDIMIENTO.**

TERCERO. Este asunto **no se considera de relevancia documental**, por lo que es innecesaria la conservación del expediente en su totalidad, en términos de lo establecido en el último considerando de la presente ejecutoria.

Notifíquese, publíquese y anótese en el libro de registro; con testimonio de esta sentencia, devuélvanse los autos originales a la Oficialía de Partes Común de los Tribunales Colegiados de Apelación del Decimoquinto Circuito, con residencia en Tijuana, Baja California y, en su oportunidad archívese este expediente.

Así lo resolvió este Primer Tribunal Colegiado del
Decimoquinto Circuito, por unanimidad de votos de los
Magistrados **Juan Manuel García Arreguín, Jorge Alberto
Garza Chávez y Juan Manuel García Figueroa**; siendo



12930, 12931, 12932, 12933, 12934 y 12935



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

EVIDENCIA CRIPTOGRÁFICA - TRANSACCIÓN

Archivo Firmado:
40438264_0291000029386898004.p7m
Autoridad Certificadora:
Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal
Firmante(s): 4

FIRMANTE				
Nombre:	HARUMI YVONNE TAKASHIMA MEZA	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.02.54.56	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/12/22 16:39:09 - 15/12/22 10:39:09	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	58 80 9e c0 a3 c3 3d 6d 34 cc a2 a3 a0 a2 3f 9d 18 19 2e d5 3f 08 d3 f5 01 46 63 9a a2 20 b5 bb 9d a4 14 5b b4 30 44 98 ec 2a 51 d2 e8 97 65 b8 c4 f2 48 03 98 b0 1a 44 7c f4 ee bb 99 5a 79 38 bb b9 ed 7b 9a 67 c8 4b a3 31 7c 04 dc c4 0b 8b 6f b3 25 50 0c 7b 92 ca 08 c6 cd f6 7f 6a 1a 54 f9 1a 2c c6 92 af 38 c1 3b 23 09 ef 6a 96 f1 5e 51 50 9d 3f 48 5a 54 8e 95 14 c2 b2 4d 03 22 ed e0 d9 b3 fa 47 8a 57 ad dc 1c fb 3b 75 36 1a 3a 0a 1e b4 98 fc c1 ed 3c d4 73 39 1a 83 43 2b 4d 7c cf 81 d9 3c 38 4b ef 51 d2 91 7a c7 37 e9 38 33 d9 22 b4 65 d0 cf 2d 42 64 83 24 63 5d 1b 3e 43 c5 69 ca 97 54 af b5 7f 18 ed 67 31 02 5a 51 9d 21 23 a9 89 4d f7 f8 2d 1a 79 ad dc 65 49 bd 9f fb a1 ec cd 79 bc 95 0b 71 15 9f b6 0d 5b f2 be e8 0f c5 cb ab d0 8b b3 b2 79 6a 7d 1d b9 90			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	15/12/22 16:39:09 - 15/12/22 10:39:09			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	15/12/22 16:39:09 - 15/12/22 10:39:09			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	25062973			
Datos estampillados:	eKv/AxhFIUw8Ws2sZeH53Ovm96Y=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JUAN MANUEL GARCIA ARREGUIN	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.e6.3f	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/12/22 17:47:23 - 15/12/22 11:47:23	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	09 34 4b 90 c0 82 e2 14 3a b9 6a 6f 76 37 67 a2 70 3c c2 34 34 f2 b7 2e 6f 07 f2 89 9b 4b c9 56 27 5d 14 e4 c5 bf e9 93 d1 cf dd 92 3a 9e ad 22 12 ec 4a ca 9a ee b4 d3 2c 11 ad e4 bf 35 51 43 00 2b f7 b9 03 c3 e3 ef 0f 9b 3c 0a d4 17 82 ea 41 73 77 04 da 0c b4 06 24 fc 9c c5 1a 72 b3 9c 45 db 11 7b 2b 10 ae ba b1 8f 26 7f 88 e2 ac 90 dc 43 15 06 ab 9c 5f 66 10 31 e4 a8 4c 62 ae c2 66 a9 37 ef eb df b2 8d 41 cb 6f 94 59 b2 7b fc 32 49 bb 6a c9 f0 0f df 38 00 21 88 e3 59 92 55 1b 8c 83 60 ed a7 52 51 60 e8 4e 81 2c db d7 83 c6 fa 54 f0 e6 04 e3 82 fa 8c d8 73 ce 69 57 33 3b 0a 20 e6 77 73 ad a1 7a 34 25 17 e4 46 d7 32 80 13 7b c6 b7 7b 1a 80 92 8e d7 38 42 e6 6e 99 77 50 7d 00 be 83 cb 18 12 0a 9a c2 19 13 39 71 cf ac c2 08 df e5 76 75 41 f2 7d ad a7 3b d3 84			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	15/12/22 17:47:23 - 15/12/22 11:47:23			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	15/12/22 17:47:23 - 15/12/22 11:47:23			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	25112311			
Datos estampillados:	uH9NZE/WWzcxsKJ5u/96osXwbh8=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	JORGE ALBERTO GARZA CHÁVEZ	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.01.6e.b9	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/12/22 18:31:46 - 15/12/22 12:31:46	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	58 d4 6e dd e4 30 bf 73 db 8b 54 46 da 56 76 19 89 a1 89 53 86 4a a9 0e 4e 47 e6 b7 76 01 02 06 de 13 c0 6c 46 a0 c5 1f fe 9a 46 45 8e 9d 7e b2 9c cf d1 14 4f d2 f8 8e 35 88 0a a9 61 f3 0f de 69 03 93 65 e6 31 22 66 d3 65 c1 df 42 38 5c 7e 90 2b ec 39 02 fc dc bb b3 62 bf 58 0f 6e a1 ff b3 e3 ec 7c 71 a4 3e 8c 00 ed 77 8a 78 48 6a 9f ce 30 1d ea e9 08 4c ca a0 f3 8e 08 01 a0 92 b7 d6 67 d2 87 b3 f2 3a 3e 03 db 4d 39 df d4 54 68 0c ba ea d4 8b c1 27 f7 51 25 5a a7 10 4f df 79 5d 4a 0e 67 3b ed c3 40 61 45 c0 70 71 ce a2 bf 8f cf fe dc 48 79 b5 0a 52 94 43 66 8e cb f5 c4 b2 9f b8 74 3a b0 db ad ae 12 3c da 75 6d 1a a1 c6 21 98 08 b7 a1 52 bb 8d 2f 86 f3 76 ba 07 29 b8 0a b0 bc 26 c0 15 64 44 4d ae 6c 69 96 0c 8a 9f b8 e7 2c 02 23 4d b1 db b0 b0 b9 65 b7 44 81			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	15/12/22 18:31:46 - 15/12/22 12:31:46			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	15/12/22 18:31:47 - 15/12/22 12:31:47			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	25148097			
Datos estampillados:	NPQ3rJbIOvnlkHD9aBiIHtpe2kw=			



PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

FIRMANTE				
Nombre:	Juan Manuel García Figueroa	Validez:	BIEN	Vigente
FIRMA				
No. serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2d.f4	Revocación:	Bien	No revocado
Fecha: (UTC/ CDMX)	15/12/22 18:42:09 - 15/12/22 12:42:09	Status:	Bien	Valida
Algoritmo:	RSA - SHA256			
Cadena de firma:	1b 8b a8 e6 a1 4f ab 7f 2b 95 17 17 30 ae 6a a2 7b f8 b8 28 4a c6 40 8f 62 3c 75 1a fc 02 0b 34 ba d3 93 78 0c 93 54 01 d5 d5 93 04 75 3b c0 48 e5 b1 83 9b 25 c1 c0 cb 34 2f de 13 8b ee f0 eb 63 e1 40 3a 5b 26 73 6c ae dc 61 d7 bf 0c 16 ac 33 25 a2 e5 c6 cd 2c cf cb 0b 44 f3 10 71 35 08 7e 94 c1 05 d4 43 97 55 ea 2d 67 6b b0 b4 83 57 4f 21 b2 6d 96 f0 a4 0b 41 09 12 4f 1e 4f fd bb 76 3d 3c e8 ce 77 84 0b 85 7d 26 4e 05 5e d6 2d d7 de c9 db 42 5b 8b aa 3b d4 94 c6 9f 4a 3a f9 f9 24 12 e1 6d ea 8e f4 12 92 61 63 00 41 24 5a 8c 69 ac b8 a2 8e 38 f5 67 99 4c af ce a3 37 89 be d9 d3 8f 2e 90 a3 c3 37 db dc f3 a7 0d 57 76 75 df ea d2 a2 eb 7c 78 06 eb 1a 49 68 e2 3a 8b b6 9f e7 6d 3b 2e 1c d1 06 9c 79 89 f3 af 17 db 96 01 8e ea f7 e0 25 d0 3e db a0 93 20 26 5e 8f			
OCSP				
Fecha: (UTC / CDMX)	15/12/22 18:42:09 - 15/12/22 12:42:09			
Nombre del respondedor:	OCSP ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia de Consejo de la Judicatura Federal			
Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			
TSP				
Fecha : (UTC / CDMX)	15/12/22 18:42:09 - 15/12/22 12:42:09			
Nombre del emisor de la respuesta TSP:	Autoridad Emisora de Sellos de Tiempo del Consejo de la Judicatura Federal			
Emisor del certificado TSP:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
Identificador de la respuesta TSP:	25156466			
Datos estampillados:	U6t83/Lp4ahOFj3oJHV9pUD1gFc=			

